

Notas para un debate sobre una política económica alternativa*

Miren Etxezarreta

Ante cualquier crítica a la actual política socio-económica el «establishment» político y académico reacciona con acritud exigiendo a los críticos que presenten «su alternativa»¹. La falta de programas alternativos se esgrime como arma arrojada frente a las posiciones críticas de la izquierda (a la derecha no se le exige lo mismo), ignorando ostentosamente que no se puede pedir a quienes no tienen el poder el diseño de dicha estrategia².

A pesar de ello, las izquierdas de este país deben enfrentarse a la elaboración de una estrategia socio-económica alternativa. Es necesario mostrar que, incluso dentro del sistema capitalista, por tanto, con grandes limitaciones y sin ilusiones respecto a su capacidad transformadora, existen, sin embargo, algunas vías alternativas de gestión de la economía que pueden producir efectos algo más favorables para las clases populares de los que resultan del modelo actual.

**Una versión resumida de este artículo fue publicada en la revista Cuatro Semanas, Año 2, N° 13, Febrero de 1994.*

1. Ignorando que es la responsabilidad y el trabajo de gobernantes el gobernar y de la sociedad exigir que se produzcan los resultados que ella desea. Es grotesco, si no fuese tan dramático, que los sucesivos Ministros de Economía «exijan» a los partidos que les critican y a los sindicatos «una alternativa» para poder considerar seriamente sus posiciones, o situaciones tan esperpénticas como la del Ministro de Trabajo que recientemente exigía un viernes a los sindicatos «una alternativa **antes** (de reanudar las conversaciones) **del miércoles**» (de la siguiente semana).

2. Creemos recordar de algún famoso dirigente socialista –Solchaga– cuando todavía estaba en la oposición replicó a un Ministro de UCD que le planteaba la misma exigencia: «déme Vd. el poder Sr. Ministro, que plantearémos la alternativa». Se ha demostrado que, efectivamente, era capaz de hacerlo.

Las líneas que siguen pretenden ser un paso más en el proceso de la construcción de esta alternativa. Pero no para proponer una «gestión de la crisis» encuadrada dentro de las coordenadas que el poder establece, sino para cambiar sustancialmente la dirección de la política económica actual. Se trata de avanzar hacia un programa **alternativo** que represente una situación genuinamente diferente.

Claro está que las propuestas han de ser viables para que sean válidas, pero la viabilidad no es un elemento fijado para siempre, sino que depende en gran parte de la composición de fuerzas existente en la sociedad. El problema de una política económica alternativa es mucho más político, que técnico. De aquí que un programa económico verdaderamente alternativo solo podrá establecerse a partir de una composición de fuerzas sociales y políticas que apoye tal opción.

La maduración de esta estrategia y su capacidad para reunir el respaldo necesario que los convierta en una opción real, no es, sin embargo, automática ni espontánea: no podrá eludirse la necesidad de abrirse paso en el marco de un intenso debate ideológico, que gravita decisivamente en esa correlación de fuerzas, y que obliga a definir de antemano con el mayor rigor su naturaleza esencial, sus contenidos básicos, sus lineamientos estratégicos de largo plazo y sus propuestas de políticas inmediatas, su coherencia interna, las razones de su viabilidad económica y política.

LA COMPETITIVIDAD NO NOS LLEVA A NINGUNA PARTE

La figura central en el discurso económico actual es la de la competitividad. Hemos de ser competitivos, es la insistente consigna. Concibiendo la competitividad como una ventaja generalizada en los precios de nuestros productos respecto a los del exterior, fundamentalmente a base de costes laborales inferiores a los de nuestros competidores. Una vez lograda la tan ansiada competitividad, el mercado nos proporcionará todo lo demás por añadidura.

La competitividad supone que podamos vender los productos del país en el exterior y que se pueda resistir en el interior la competencia de las ventas extranjeras. Supone situar en las exportaciones el motor principal del crecimiento de la economía del país.

Es necesario, sin embargo, decirlo abiertamente: este planteamiento de la competitividad no nos lleva a ninguna parte. Por un lado, porque no se está intentando real y seriamente mejorar la competitividad –sólo importa disminuir los costes laborales y se ignoran todos los demás aspectos imprescindibles para lograrla, como tecno-

logía, calidad y diseño, estructura y organización empresarial, sistemas comerciales, etc—, y, por el otro, porque no todos los países del mundo pueden convertirse en exportadores netos. En este momento un grave problema económico en la base de la crisis mundial es el exceso de producción para la demanda real existente³, mientras todos los países intentan aumentar sus exportaciones. A pesar de todos los discursos acerca de la potencialidad de los acuerdos del GATT para aumentar el comercio mundial, éste no puede aumentar lo que sería necesario para absorber los esfuerzos exportadores de todos los países. En el caso de España, nuestro país ocupa una posición muy débil en la división internacional del trabajo —no somos suficientemente pobres, «todavía»(?), para competir con los países de bajos salarios, ni disponemos de un sistema productivo capaz de competir con los más ricos— y aun mejorando la competitividad los problemas de nuestra economía, y particularísimamente el del empleo, no se pueden resolver solo con esta mejora. Al contrario, tal como se plantea ahora, para avanzar hacia la competitividad se están generando situaciones que redundan directamente en el grave deterioro del empleo y de la situación económica y social de amplios sectores de la población española. Un desarrollo más amplio y detallado de estos aspectos, que no es posible presentar aquí, permitiría consolidar el convencimiento de que el énfasis en la competitividad solo presenta para nosotros un callejón sin salida.

Desde 1977 se está presionando duramente en los mercados laborales bajo el argumento de que hay que mejorar la competitividad, pero los problemas de nuestra estructura industrial y del empleo se han ido deteriorando gravísimamente. La estructura productiva, con una fuerte concentración, reestructuración y destrucción de unidades productivas se ha debilitado muy acusadamente, y el número de parados es el más alto de nuestra historia reciente. Si son los salarios los que han de promover la competitividad, ¿hasta qué niveles habrían de bajar nuestros salarios para ser competitivos y absorber los 3,5 millones de parados? Ni los propios gestores de la política económica se atreven a afirmar que la competitividad resolverá estos problemas. Señalan que «mejora» la economía, pero se tardará en resolver la situación del empleo, ¿para quién «mejora» entonces?

La llamada actual a la competitividad tiene mucho de cortina de humo para justificar la presión que se está realizando en los salarios y las condiciones de trabajo, así como la dramática situación del empleo y la amplitud del paro. Se utiliza también para que parezca que existe una estrategia de salida de la crisis, frente a la tremenda falta

3. Hecho que tiene muy poco que ver con las necesidades reales de la población mundial, que, como es sabido, son inmensas y dramáticas.

de medidas activas y eficientes para ello⁴, ¿tienen ellos una política económica?, habríamos de preguntar, ante su exigencia de que produzcamos una alternativa.

Un proyecto responsable y realista de competitividad supone un programa a largo plazo que implica la definición de estrategias de especialización y de polos de desarrollo a partir de sectores líderes y su encadenamiento estructural hacia adelante y hacia atrás. El problema no es conseguir exportar, sino como consolidar una inserción estable y permanente en el comercio internacional. Para un país el criterio de competitividad se vincula con su capacidad de inserción en los mercados mundiales, de generación de empleo y de elevación del nivel de vida.

Una estrategia alternativa para la economía española no puede tener como eje únicamente la competitividad salarial con el exterior. Nuestros problemas no pueden ni siquiera aproximarse a una solución en tal espacio.

LA NECESIDAD DE NUEVOS MODELOS

Se impone la reflexión para el desarrollo de nuevos modelos, sobre líneas de actuación que contribuyan a mejorar la suerte de las clases populares, a romper con la sociedad dual que se está fortaleciendo y consolidando, donde unos, muy pocos, tienen mucho de todo, y otros muchos tienen cada vez menos. Por ello, propongo a continuación algunas posibles líneas de un modelo alternativo con ánimo de que sirvan para estimular la discusión y el debate, como áreas de trabajo inmediato para consolidar y detallar el modelo, avanzando en su concreción.

Es necesario partir de una situación de crisis mundial. El capitalismo, triunfante en lo político, se encuentra sumido en una profunda crisis económica. El agotamiento del esquema de acumulación de la postguerra europea ha derivado en una grave crisis y en un período de inestabilidad e incertidumbre en el que no se observan señales claras de cuales son las direcciones en que va a desarrollarse un nuevo modelo que permita una acumulación potente y continuada. Se trata de una crisis de alcance cuya salida de forma estable y consolidada resulta difícil de augurar⁵ y que, una vez más, muestra la

4. Claro que últimamente ya casi ni pretenden tenerla y se limitan a afirmar que hay que preparar al país para que esté preparado para aprovechar la recuperación internacional cuando llegue. ¡Triste planteamiento para la política económica de un estado soberano!

5. Las recuperaciones que están teniendo lugar desde los primeros ochenta son cada vez más inestimables y de corta duración, existiendo hoy un consenso generalizado de que estamos inmersos en el cambio de un modelo de acumulación, pero sin que se tenga nada clara la dirección que seguirá el mismo para convertirse en un modo de acumulación estable, ni el período que ello requerirá.

naturaleza esencialmente contradictoria de este sistema. Cualquier alternativa que se pretenda diseñar ha de partir de esta situación e integrar su esquema en la misma.

No obstante, la crisis mundial no anula totalmente la posibilidad de actuar a niveles más bajos de agregación, en particular a nivel de país, como parece aducirse actualmente para justificar la situación española. Repetidamente se afirma que nuestra crisis es debida a la crisis económica internacional y como desideratum de política económica se plantea que hay que procurar que la próxima reactivación internacional encuentre al país preparado para aprovecharse de ella. Es verdad que la dinámica mundial es crucial en nuestra economía, pero constituye una visión más parcial afirmar que no se puede hacer nada desde dentro. Si así fuera el impacto de la crisis sería análogo en todos los países y no lo es. La crisis internacional no elimina la responsabilidad de dirigir la economía del país en la dirección que se considera más adecuada.

Una verdadera alternativa ha de situar la recuperación y expansión del empleo en el centro de su estrategia. Para lo cual es imprescindible fortalecer, expandir y articular mejor entre sí la estructura productiva. Y esta necesita una demanda efectiva que le proporcione los incentivos necesarios para operar. La economía de oferta que potencie el desarrollo de un aparato productivo eficiente, no puede ignorar el otro lado de la medalla, consistente en una demanda que pueda absorber la producción, para sostener una economía sólida. Los mercados externos en un país como el nuestro no son suficientes para absorber la producción interna; de hecho prácticamente en todos los países, pues incluso aquellos conocidos como «exportadores de manufacturas» se apoyan en una potente demanda interna para su desarrollo. El empleo y la demanda interna deben de ser los ejes centrales, las coordenadas, de un nuevo modelo alternativo. Se ha de comenzar a pensar en modelos autocentrados, endógenos, donde todo no dependa de lo que suceda en los mercados mundiales.

Si ya la tecnología actual, por sí misma, hace muy difícil generar empleo suficiente para la población que necesita trabajar, es extremadamente difícil que este se genere a partir de la competitividad externa. El aumento de ventas al exterior, las exportaciones, o la sustitución de importaciones en los mercados internos –ámbitos de incidencia de la competitividad– suponen siempre una parte minoritaria de la producción nacional. Parece bastante más sensato procurar un aumento permanente y continuado del total de la producción nacional basado en la demanda interna, que, además, se puede regular y estimular con mucha mayor facilidad que las exportaciones para, por lo menos, generar el máximo de puestos de trabajo que sea posible con el nivel de desarrollo económico del país.

La visión de la competitividad basada en la permanente disminución de los costes laborales, ha llevado a ignorar que los salarios son la fuente principal de la demanda, y que su disminución implica reducir muy gravemente las posibilidades de absorción

de la producción del país por el consumo y la inversión interna. En España, en 1993, aunque las exportaciones han aumentado casi en un 19%, la demanda interna ha disminuído entre un 2 y un 2,5%, y el empleo ha disminuído en 345.000 puestos de trabajo. Una concepción mucho más positiva de los salarios, como base de la absorción del esfuerzo productivo debiera estar en la base de una nueva estrategia.

La cohesión y expansión del sistema productivo, basado en la demanda interna, habría de ser el pivote central de este nuevo modelo, para generar una economía con empleo. La trayectoria interna como medio de aumentar la productividad y el crecimiento de la economía nacional y resaltar los instrumentos y agentes internos que puedan desarrollarla. Considerando la demanda y competitividad externa como elementos subordinados, dependientes de las variables internas.

Articulación con el exterior y proteccionismo

No se trata de establecer economías cerradas –por otra parte ya inviables en el mundo actual– sino de considerar el crecimiento interno como eje central y el externo como subordinado a éste. Sigue siendo necesaria la preocupación por la competitividad pero insertada en un modelo económico capaz de generar una economía interna más dinámica, con las relaciones económicas externas reguladas y dirigidas. Se utilizarían, desde luego, los precios, la tecnología y los capitales internacionales, pero la razón de ser y fuerza motora de la actividad económica serían la productividad y la demanda interna que crean sus propios imperativos de apertura, competencia, liberalización, estabilidad económica y reforma estructural. Un modelo autocentrado, con liberalización externa regulada, con un diseño económico e industrial estratégico en el que se integre el medio exterior.

No es posible ignorar la economía mundial ni la necesidad de inserción de la economía española en la misma. Pero ello no implica necesariamente la apertura indiscriminada y repentina de España a poderosas fuerzas económicas internacionales. Un proyecto alternativo no puede prescindir de una ampliación de su espacio externo, pero en un contexto de jerarquización distinto. Se puede definir una estrategia esencialmente «aperturista» de integración plena a la economía internacional en los términos a que conduzcan las fuerzas del mercado, –esquema español actual– o, alternativamente, se puede propugnar una estrategia de búsqueda deliberada y activa de determinados términos de inserción, preservando un mayor grado de autonomía estatal. En la segunda opción, la función dinámica se desplaza a las producciones para el mercado interno; y el papel de las exportaciones sería el de proporcionar la capacidad de compra en el exterior para sostener los niveles de importaciones necesarias

para el funcionamiento de ese patrón de crecimiento. No se trata de establecer una dicotomía entre «dentro y fuera» sino de encontrar una combinación adecuada de ambos elementos, bajo la guía, y esta es la diferencia crucial, del desarrollo económico interno y el bienestar de la población.

Un modelo autocentrado puede precisar un cierto grado de proteccionismo y la graduación y regulación de la apertura al exterior. Lo cual no supone, por definición, la repetición de los errores del proteccionismo en el pasado. En la actualidad se presenta al proteccionismo como elemento permanentemente negativo y al comercio sin regulación estatal —que no es ni a distancia «libre comercio»— como proveedor de todas las venturas. Pero no se puede aceptar que este último opera en beneficio de todos los participantes en el mismo. Basta observar que desde el final de la segunda guerra mundial se ha ido acrecentando la apertura mundial para las relaciones económicas, y a final del siglo nos encontramos con una crisis económica de gran severidad que afecta a todos los países industrializados, y con la pobreza y marginación para la mayoría de los países periféricos. Ante esta situación, ¿cómo es posible sostener sin importantes cualificaciones las teorías acerca de los beneficios del comercio?

Continuar reproduciendo la tradicional polémica entre librecambio v. proteccionismo no es útil, sino inoperante y estéril. Se ignora deliberadamente que es compatible desarrollar las condiciones necesarias para limitar las importaciones de ciertos productos en condiciones razonables de protección, como lo han hecho tradicionalmente los países desarrollados, y al mismo tiempo promover la apertura de la economía y buscar una mejor articulación al mercado mundial. Existen ya modelos teóricos que plantean con solvencia una visión distinta del comercio exterior y el crecimiento⁶. Es necesario desideologizar la discusión en este ámbito y enfrentar la dirección de los flujos externos, no solo del comercio, discutiendo qué aspectos han de ser regulados y cuáles dejados al arbitrio exclusivo del mercado.

Los flujos económicos internacionales se controlan de múltiples formas. Si la economía española continúa en su senda actual es muy probable que los propios hechos económicos nos obliguen a controlar el comercio exterior, incluso en el modelo neoliberal que se está siguiendo ahora. El elevadísimo déficit de nuestra Balanza comercial de 1986 a 1992 se ha podido mantener por las entradas de capital extranjero. Si estas disminuyen o los capitales externos se marchan, nos veremos obligados a

6. Véanse los economistas postkeynesianos, los trabajos de C.I. Bradford, los de la nueva teoría del comercio internacional de Krugman y los trabajos de Romer, así como el debate en este sentido de los autores latinoamericanos como el recogido en la obra de L.J. Garay «Estrategia industrial e inserción internacional», FESCOL, Colombia, 1992 y las ideas planteadas por P. Vuskovic «Pobreza y desigualdad en América Latina» UNAM, Mexico 1993.

frenar nuestras importaciones drásticamente, recurriendo a múltiples fórmulas. De hecho ya han disminuido seriamente debido a las devaluaciones de la peseta y especialmente a la crisis económica interna que ha frenado las compras al exterior. La recesión interna con su tremenda secuela de paro y deterioro de las condiciones de vida es una manera de controlar las relaciones comerciales exteriores, pero no es la única. ¿Por qué se acepta ésta frente a otras alternativas menos dolorosas?

El libre comercio no ha existido nunca más que para los flujos favorables a los países dominantes. La apertura sin regulaciones de las economías favorece principalmente a los grandes poderes económicos mundiales, que pueden operar a su beneficio sin control alguno a nivel mundial. Si, como parece, la política económica que plantea el gobierno para la recuperación de la economía española —que no es la única posible— consiste en ofrecer las mejores condiciones posibles al capital extranjero para que invierta en suelo español, es normal que quiera ofrecer esta desregulación total y el mercado laboral más degradado posible. Pero al mismo tiempo está hundiendo miles de unidades productivas que trabajan para el mercado interno, generando una economía tremendamente vulnerable a decisiones tomadas a nivel mundial, y que no pueden ofrecer una solución al problema del empleo, con el resultado de una economía de exclusión de grandes sectores de la población.

El papel del sector público

Una estrategia alternativa supone también un papel distinto para el sector público. Mucho más activo, creativo y especialmente **directivo**, regulador, en el sentido de gestionar la economía en direcciones muy específicas, en lugar de abandonar toda responsabilidad en el mercado. No se trata de una simple reconstrucción del estado intervencionista keynesiano, sino de una nueva concepción del Estado, coherente tanto con otra estrategia económica como con las actuales demandas políticas.

El gran desafío consiste en abrir una alternativa distinta entre lo que hasta hace muy poco aparecían como dos opciones ineludibles: o una planificación totalizadora que supone centralización y autoritarismo, y a la postre, ineficacia, o un mercado que, a cambio de determinados éxitos parciales, genera y reproduce constantemente desigualdad y pobreza. Es necesaria una integración eficaz de programación y mercado, en la que la primera cumpla la función de dar coherencia y eficacia a las grandes decisiones sociales y la segunda constituya instrumento de expresión de las preferencias individuales.

Es imprescindible buscar una combinación armoniosa de la actuación del Estado con el sector privado, en una nueva concepción de dirección social de la economía. Sin que implique el deterioro de la actividad privada, sino al contrario, creando condiciones favorables para su expansión pero dentro de una mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Tampoco hay que ignorar la situación actual entre lo público y lo privado: ¿es que ahora se está desarrollando todo el capital privado o solamente la parte mas poderosa y oligopólica del mismo? ¿Qué está pasando con la mediana y pequeña empresa en España que opera para el interior y no tiene capacidad exportadora?

Esta recuperación de un sector público puntero, eficiente, director de la orientación de la economía requiere una concepción mucho más participativa y controlada de la democracia. La situación actual de la vida política, anclada en la burocracia, el favoritismo y la corrupción, lleva a rechazar rápidamente la potenciación del sector público. Y es lógico que se reaccione así. Un sector público como el actual no está en condiciones de cubrir el papel que en este modelo alternativo se le asigna. De aquí que el diseño de una revitalización política de la democracia, conducente a una mayor participación de los ciudadanos y a un mayor control por los mismos de las decisiones públicas sea uno de los ámbitos de reflexión y propuestas más necesarios.

Un modelo distinto de consumo

Este modelo obliga a plantearse también un nuevo modelo de consumo, aspecto ignorado en muchos planteamientos alternativos que, sin embargo, aquí deseamos destacar. Dentro de un gran respeto a la libertad individual, pensamos en el consumo de una sociedad más solidaria, menos obsesionada por el consumo indiscriminado, dirigido a cubrir las necesidades que se plantean en una sociedad desarrollada, pero valorando mucho más el enriquecimiento personal que la acumulación permanentemente creciente de bienes de consumo ostentoso.

Lo que implica una reconsideración de las prioridades productivas: las necesidades internas de bienes de consumo generalizado más que las exportaciones, la producción de bienes básicos mas que la de los de lujo, la producción material más que ciertos tipos de comercio, los servicios esenciales más que los financieros; una forma distinta de entender la modernización y la incorporación del progreso técnico, más que la tecnificación orientada directamente a la inserción exterior, la difusión de la técnica al conjunto de la economía y especialmente a la producción de bienes básicos. Una producción respetuosa del medio ambiente.

ALGUNAS PROPUESTAS CONCRETAS

No existe sólo una única política económica. Existen medidas que pueden permitir un avance en la dirección que aquí propugnamos. Avanzamos un bosquejo extremadamente limitado y sintético como ejemplo de que existen posibilidades a explorar en esta dirección:

- Establecer una precisa y explícita definición de objetivos. Situando la creación de empleo eficiente en el centro de la estrategia, pero revisando también los restantes objetivos. Potenciando aquellos que contribuyen a la calidad de vida de amplias capas de la población, a una sociedad más solidaria. No se trata de crecer produciendo más para el consumismo individual desenfrenado, sino de crear un clima de mejora general de las condiciones de vida, en el respeto a las opciones individuales. Lo que afectaría a la composición de la producción, al impacto en el medio ambiente, a las condiciones de trabajo. Existen ya grupos sociales importantes que se mueven en esta dirección y cuestionan la actual sociedad de consumo. ¿Por qué no avanzar en esta dirección?
- Una política productiva dirigida a reforzar la densidad del tejido productivo y la articulación entre los diversos ámbitos –productivos, financieros, de servicios–, junto con un diseño social de las líneas prioritarias de producción: la provisión de servicios sociales y los bienes salarios, autobuses en lugar de armas para generar empleo... No existe razón alguna para que no fuesen aceptadas las inversiones directas del exterior, la tecnología extranjera, las empresas transnacionales, siempre que encajasen en el diseño que se haya establecido para la producción en el interior.
- Un esfuerzo social para mejorar la productividad y la competitividad. Aprovechando las iniciativas de todos los participantes en el proceso productivo, estimulando intensamente la investigación y el desarrollo tecnológico más adecuado a los objetivos prioritarios, ya que no siempre la técnica que ahorra más empleo es la socialmente más barata. Un poderoso esquema de investigación que, anclado en los procesos productivos, se remonte a los elementos generales y estimule la interacción entre el mundo del trabajo, la empresa y las universidades.
- Una política de estímulo y de exigencia al mundo empresarial, a la inversión y al avance organizativo y tecnológico de las empresas, donde las direcciones empresariales tienen una importante aportación que realizar. La potenciación de la competencia empresarial, prestando particular atención a la estructura empresarial así como a sus consecuencias en la eficiencia productiva y los precios, para tratar de evitar un proceso inflacionario causado por precios

oligopólicos. Este modelo requiere que el capital privado –nacional e internacional– acepte que el mismo exige un cambio de planteamientos, pero que perciba, también, que sus posibilidades de desarrollo no se ven mermadas, sino que, al contrario, podrían verse incrementadas con una demanda interna sólida y estable.

- El papel del sector público como director y regulador debería traducirse en una reforma fiscal que, invirtiendo la composición de la imposición, permitiera aumentar los ingresos fiscales. Una reforma, por arriba, que sin modificar sustancialmente la presión fiscal media supusiese un incremento de la imposición a los patrimonios improductivos y los estratos de renta más altos. Ello permitiría una actuación estatal sin incrementar el déficit público e incluso disminuyéndolo del alto nivel actual causado, entre otras cosas, por la intensidad de la crisis económica. Explorar nuevas e imaginativas formas de financiación para las inversiones públicas –los «trust funds»– que ya se están ensayando en otros países.
- Una exigente revisión del gasto público iniciándose por una distinción entre el gasto corriente, de inversión y transferencias sociales. Potenciando la actuación en torno a la dirección y estímulo del aparato productivo y de distribución, a la economía real. Introduciendo la austeridad en el comportamiento público a todos los niveles, revisando con extremo rigor todo tipo de gasto de mínimas connotaciones suntuarias. Haciendo explícito el papel redistributivo del Estado. Asegurando a todos los ciudadanos el acceso a niveles mínimos de renta y servicios sociales básicos.
- Una regulación de las transacciones externas, de capitales, productos y tecnologías. Por ejemplo, una posible protección de mercado podría combinarse con un control de precios y su comparación con los de los mercados mundiales que no permitiera utilizaciones abusivas de la protección establecida. Un sector exterior regulado permitiría controlar el nivel del déficit exterior y, por tanto, no sería tan necesaria la aportación del capital extranjero a efectos de cubrir los equilibrios de la Balanza de pagos. Lo que permitiría la disminución de los tipos de interés, que en principio podrían facilitar la inversión en el interior y la subordinación del aparato financiero –que debería basar su negocio en su función de intermediación– a la evolución de la economía real, desestimulando un sistema financiero que permita la especulación de gran alcance. Así mismo una Balanza de pagos estabilizada facilitaría una cotización de la moneda anclada en la potencialidad real de la economía y no en flujos de capital financiero extremadamente volátil. Las inversiones directas serían orientadas hacia los sectores prioritarios.

- No se puede eludir el tema de la integración en la Unión Europea. Desde las primeras etapas de la integración, hubiera sido necesaria una posición mucho más selectiva y discriminada de lo que implica la adhesión a la Unión Europea en lugar de la posición entusiasta y entreguista que se ha practicado, que dificulta ahora cualquier línea de desarrollo alternativo. No obstante el diseño europeo, como se está demostrando continuamente no está constituyendo un modelo que procede sin fricciones ni fisuras, un modelo definitivo y cerrado, sino que se está reelaborando, ajustando y aun cambiando muy significativamente a medida que los acontecimientos muestran que el esquema anterior es impracticable. Desde una posición de realismo de la situación que realmente ocupamos en el concierto europeo, y sin voluntarismos imaginarios que pretenden nuestra presencia entre los poderes de primer rango, sino partiendo del reconocimiento de nuestra relativa pobreza, debe de ser posible negociar múltiples aspectos de la presencia en Europa, si se plantean con resolución, ideas claras y la adecuada composición de fuerzas. ¿No hubieran sido posibles posiciones mucho más realistas si se hubiera aceptado desde el principio que no podíamos estar en el grupo de cabeza de Maastricht, por ejemplo? No estar entre los grandes no supone renunciar al diseño europeo. Dinamarca, Inglaterra, Italia, incluso Portugal en aspectos parciales, están demostrando que la negociación es posible. ¿Por qué no intentarlo? Sólo si genuinamente esta negociación fuese imposible, si la Unión Europea fuese negativa para los objetivos sociales que aquí estamos planteando, el pueblo español, con plena información y consciente de lo que ello implica, tendrá que plantearse si su futuro tiene imperativamente que estar vinculado a lo que hoy constituye la Unión Europea.
- Una programación de la economía que parte de regular la proporción entre la inversión deseable y el consumo, tendría que estar en la base de la política salarial. Considerando el salario no solo como un coste de producción a disminuir sino el elemento clave para generar la capacidad de absorción que corresponda a las mercancías producidas.
- Una política salarial y de empleo donde tenga más importancia la expansión del segundo que los aumentos salariales, pero sin ignorar la necesidad de cubrir las necesidades del trabajador con cierta dignidad y de distribuir los frutos de los avances productivos. La potenciación de la participación en las decisiones laborales que puedan conducir a aumentar el estímulo e interés de los trabajadores en su tarea y su empresa. Una revisión de los salarios más bajos y la adecuación del abanico salarial.
- Es necesario combinar la garantía de una cierta seguridad en el empleo a los trabajadores a cierto nivel de desarrollo de su vida laboral, con esquemas de

flexibilidad de la mano de obra –que no es el despido indiscriminado–. Es necesario asegurar un apoyo económico adecuado de los trabajadores en situación de desempleo (este sería uno de los elementos clave que facilitaría la flexibilidad laboral).

- Si son necesarios planes de austeridad deberían diseñarse y controlarse conjuntamente entre empresarios y trabajadores, estableciendo fondos de excedente no distribuido así generado, dirigiéndolos a fondos de inversión social con propiedad y control compartido entre empresarios y trabajadores, lo que impulsaría a los empresarios a mantenerlos únicamente por el tiempo imprescindible.
- Es necesario ser consciente que en las condiciones actuales de producción las necesidades de trabajo productivo disminuyen constantemente, lo que obliga a plantearse el tema de cuales pueden ser los criterios adecuados para la distribución del producto social en el futuro. Lo que implica un debate mucho más amplio que el reducido al tiempo de trabajo. El tema del tiempo de trabajo y la organización del mismo habría de ser ampliamente debatido por las fuerzas sociales y las decisiones tomadas ser el fruto de una mejora en el nivel de productividad asociado a una mejora de la calidad de vida de la población, y no como recurso de emergencia y barato ante la falta de empleo.

Y otro cúmulo de elementos que no es posible incluir aquí.

Incluso en la actualidad, podrían darse algunos pasos en esta dirección, por ejemplo, estableciendo, una enérgica política de vivienda, un sistema descentralizado de inversiones sanitarias, la mejora del urbanismo y los servicios locales, potentes esquemas de mejora del transporte público vinculados a la vida cotidiana (y no solamente a las grandes vías internacionales)... Esto permitiría estimular la industria de la construcción –con bajo componente de importaciones y alto efecto multiplicador–, aumentar el ahorro de los compradores de viviendas, generar el poder de compra para el consumo, mejorar la calidad de vida de amplias capas de la población. Particularmente tirar de la demanda interna y la producción de las empresas, lo que ampliaría sensiblemente la capacidad de generar empleo. Ello exigiría, claro, la obtención de los fondos necesarios a través del control del fraude fiscal, imposiciones fiscales a las grandes fortunas e imaginativas formas de financiación.

Una cotización baja de la peseta, unas ciertas prioridades en las importaciones que pueden exigir cierta ingeniosidad en su control, y una enérgica política de exportaciones, que supone mucho más que bajos salarios, deberían disminuir el déficit comercial, lo que facilitaría que la necesidad de entradas de capital extranjero especulativo no fuesen tan elevadas, y permitiría disminuir todavía más el tipo de interés –sin

depender tanto del Bundesbank— estimulando así la inversión y logrando un ahorro sustancial en la financiación del déficit público, mientras se revisa la incidencia de la estructura oligopólica en los precios para controlar la inflación.

Unas negociaciones con los agentes sociales genuinamente dirigidas a mejorar la eficiencia del trabajo y su absorción a nivel empresarial y no a deteriorar la condición de los trabajadores bajo la argumentación de la competitividad...

Unos primeros pasos en una dirección distinta a la que se ha seguido en los últimos quince años, que permitirían reforzarlos y ampliarlos y, también, explorar sus limitaciones. De todos modos, no supondrían, peores «experimentos con gaseosa» de lo que implica mantener el mismo modelo que ha conducido a cuatro millones de parados y la desmoralización de la sociedad de este país.

Viabilidad económica y política

La respuesta inmediata es que este tipo de modelos no son posibles, constituyen una «utopía» (por supuesto en sentido peyorativo), que nuestra integración en la economía mundial lo impide. Por el contrario considero que es mucho más «utópico» (también peyorativo) creer que con el «modelo competitivo» España pueda recomponer su economía. ¿Puede España ampliar su competitividad externa en la magnitud necesaria para resolver sus problemas? ¿A cuántos millones de parados hemos de llegar, en qué forma han de deteriorarse todavía las condiciones de vida de los españoles de a pie para convencernos de que no hay salida por esta vía?

Es muy posible que los modelos de competitividad externa estén acercándose a su límite a nivel mundial. Japón y los países del sureste asiático, países que han utilizado con más éxito este modelo, están ya encontrando dificultades para su mantenimiento; sus seguidores, la segunda generación de países asiáticos, incluyendo a China y los países del Este, se encuentran ya con mercados muchos más duros y ofrecen, además, salarios mucho más bajos con los que tenemos que competir. Tampoco hay que olvidar que los países industriales —entre los que se incluye España— suponen actualmente más de un 70% del comercio mundial y no parecen dispuestos a disminuir su participación, sino todo lo contrario. ¿Es posible que el comercio mundial crezca tanto como para que en el inmediato futuro encuentren acomodo en el mismo todos los candidatos a incrementar sus exportaciones? No me sorprendería excesivamente que de aquí a unos pocos años hubiera de plantearse un cambio radical de estrategia para el desarrollo volviendo los países a considerar los esquemas autocentrados. No todos los países pueden

ser exportadores netos; Un ejercicio de creación de escenarios de planificación estratégica realizado en junio de 1989 en el Banco Mundial concluía que: «Aunque los gobiernos se centren en cuestiones mundiales, a medida que avance la década predominarán fuertes tendencias hacia preocupaciones internas en los **grandes países y bloques**»⁷.

En esta dirección el caso de Estados Unidos es aleccionador. Ante la intensificación de la competencia de los países asiáticos, Estados Unidos, por medio del Tratado de Libre Comercio con Canadá y México, se asegura de que dispondrá de un ámbito «interno» que le permita una reestructuración productiva favorable, y la existencia de unos mercados más amplios protegidos que le permitirán mejorar su demanda interna. Solamente así, considera que podrá llevar la batalla al territorio de la competitividad externa.

Una adecuada articulación entre la regulación estatal y la actividad privada es la base de este modelo autocentrado de desarrollo que acepta la necesidad de integrar al capital privado, nacional e internacional, en su diseño: la primera tiene como objetivo crear situaciones y escenarios que conduzcan a los actores económicos a ajustarse a la lógica que emerge de un diseño social de la economía, mientras que la segunda operará para lograr sus objetivos particulares, dentro de aquellos. Lo que se mantiene es que es necesario regular la orientación de la economía con el énfasis puesto en la actividad interna, precisamente para aumentar la demanda de la misma, para proporcionar más incentivos y beneficios a la actividad económica en el país, para hacerla más dinámica y eficiente. Ello redundaría en una mejor situación para los trabajadores, pero también para las empresas. Aquellas que trabajan para el mercado interno, que son todavía la mayoría y quienes absorben la mayor proporción de mano de obra, verían su papel acusadamente fortalecido, sin impedir que aquellas que se dedican a la exportación continúen y desarrollen su actividad. Bajo este enfoque no tienen por qué presentarse contradicciones insolubles entre ambos actores, lo cual no quiere decir que dicha relación esté exenta de dificultades, de tensiones, de secuencias enfrentadas.

No es una transformación sencilla, desde luego. Como primera premisa requeriría un cambio muy significativo de la composición de fuerzas políticas, con una importante presencia de quienes pretenden una sociedad y una forma de vida diferente, no solo moderadas reformas en los márgenes del modelo actual.

«En definitiva, un proyecto alternativo tiene que asumir su carácter de opción global, en sus dimensiones económicas, sociales y políticas: lo cual supone revertir la mayor parte de las tendencias y direcciones en que camina la propuesta neoliberal. Por

7. Mi subrayado: C.I. Bradford. Nuevas teorías sobre viejas cuestiones... Revista Desarrollo n° 18/19, 1991, p. 102.

lo mismo los agentes capaces de hacerse cargo del nuevo proyecto son también otros, que tienen que abrirse paso en oposición abierta a los actuales actores del poder. Probablemente ello requiere construir desde fuera del poder una fuerza capaz de disputarlo frente a la resistencia tenaz de quienes disfrutaban de la situación actual y sus tendencias. Proyecto que encuentra no solo grandes escollos reales sino que tiene que encarar también las consecuencias de influencias ideológicas extensamente difundidas, que llevan a que variados segmentos de la sociedad asuman conductas políticas contradictorias con sus intereses objetivos, reduciendo el ámbito de lo que debería ser una amplísima mayoría social de respaldo a los cambios»⁸.

Logrado este cambio habría posibilidades de actuación en esta dirección. Más abundantes de las que parece. Ya hemos señalado que existen los esquemas teóricos, y en las estrategias de los países desarrollados se pueden encontrar muchos ejemplos empíricos. Prácticamente todos los países ricos se apoyan en una potente demanda interna para potenciar sus economías hacia el exterior, sus desarrollos tecnológicos, su competitividad.

Aceptar que la internacionalización actual impide todo cambio sustancial de modelo supone renunciar a cualquier grado de soberanía para establecer una senda autónoma de crecimiento, aceptar que las cosas son como son ahora y no es posible modificarlas. Apertura indiscriminada para la eternidad. Se estarían aceptando las tesis de Fujiyama acerca del final de la historia. A pesar de las dificultades que plantea la fase actual del capitalismo es posible considerar que hay cierta capacidad de maniobra si se plantea con energía. Ya se ha señalado más arriba que son bastante numerosos los países que, incluso dentro de la UE, están estableciendo pautas con cierto grado de autonomía y presentando instancias recientes donde han optado por situaciones especiales. ¿Es que la Unión Europea tiene ya en el Acta Unica y Maastricht su diseño definitivo? Estamos asistiendo a modificaciones prácticamente cotidianas de las líneas en que originalmente se plantean muchas de las grandes líneas de actuación de la UE (SME, Unión Económica y Monetaria, Plan Delors entre los más importantes, seguidos de una miríada de elementos de menor calibre). ¿Por qué ha de aceptarse que las modificaciones hayan de dirigirse solo en una dirección? Un cambio sustancial en la composición de fuerzas ¿por que no habría de plasmarse en un cambio en la estrategia económica? Evidentemente si no se acepta esta posibilidad, hablar de alternativas supone disfrutar del privilegio de elegir entre el fusilamiento y la horca.

Enero 1994

8. Vuskovic, P., «Pobreza y desigualdad en América Latina». UNAM. 1993, p. 273.